



DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
TRIBUNAL SUPERIOR. SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL
MAGISTRADA PONENTE: PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA

***"Al servicio de la justicia
y de la paz social"***

A - 107

Procedimiento: Verbal.

Demandante: María Elena Gómez Palacio.

Demandado: Alberto Antonio Echavarría Valencia.

Radicado Único Nacional: 05001 31 03 016 2019 00530 01.

Decisión: Revoca decisión apelada.

**Medellín, veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitrés
(2023)**

Procede la suscrita Magistrada a resolver el recurso de apelación que interpuso la parte demandante contra el auto proferido por el Juzgado Decimosexto Civil del Circuito de Oralidad de Medellín el 17 de noviembre de 2022 (repartido a este despacho el 26 de mayo del año en curso), a través del cual, se rechazó la demanda por no cumplirse correctamente los requisitos de su inadmisión.

ANTECEDENTES.

La Sra. María Elena Gómez Palacio presentó una demanda contra el Sr. Alberto Antonio Echavarría Valencia con el propósito de que este le devolviera la suma de \$500.000.000. Lo anterior, lo sustentó en los siguientes hechos relevantes:

Narró que estuvo casada con el demandado y mientras duró dicha relación, hubo un desplazamiento patrimonial desde su propio peculio hacia el de la parte pasiva, valorado en la suma de \$500.000.000. Sostiene que tal suceso se debió a una serie de negocios jurídicos que se vio obligada a celebrar con el demandado por las presiones que aquel le ejercía, tales como maltrato físico, verbal, psicológico y sexual.

La actora precisa que, entre los diferentes negocios que aceptó por constreñimiento de su contraparte, está el contrato de compraventa sobre dos inmuebles que eran de su propiedad identificados con M.I. 01N-5254237 y 01N-5253775. Dicho negocio jurídico quedó contenido en la escritura pública 2582 del 23 de septiembre de 2010 de la Notaría Tercera de Medellín. Expresó que aquel jamás fue honrado por el demandado porque no pagó el precio pactado. Incluso, para soportar dicha situación, afirmó que su contraparte suscribió una letra de cambio para garantizar dicho pago. Sin embargo, relató que el mentado título valor resultó quimérico porque el proceso ejecutivo donde se hizo valer terminó mediante una sentencia que dispuso declarar *«falta de causa para pedir e inexistencia de la obligación»*. Por todo lo anterior, pide ser compensada en la suma señalada en el párrafo anterior.

El Juzgado inadmitió la denotada demanda por auto del 20 de enero de 2020. Allí se exigió a la parte demandante que cumpliera con lo siguiente:

«1. Aclarará en el poder y la demanda a la clase de acción que impetra, si es por alguna clase de responsabilidad u otra acción que ocasionó la obligación de indemnización. 2. Así mismo aclarará tanto los hechos como las pretensiones, toda vez que los primeros constituyen el fundamento de las segundas, conforme lo ordena el numeral 5 del artículo 82. En las pretensiones deberá indicar de manera clara y precisa los valores reclamados. 3. Frente al juramento estimatorio presentado observa el despacho que debe ser aclarado en la forma ordenada en el artículo 206, expresado de manera razonada, mediante operaciones matemáticas, lo pretendido mediante esta acción. 4. En el acápite de las notificaciones indicará la ciudad a la que corresponde la dirección aportada para notificar a la parte demandante. 5. Sin que sea motivo de inadmisión contemplada en el estatuto procesal civil, se requiere a la parte a fin de que, en la prueba testimonial, indique de manera clara y precisa los hechos objeto de la prueba, art. 212».

La demandante mediante memorial del 29 de enero de 2020, dio cumplimiento a los prenotados requisitos. Luego, el Juzgado admitió esta demanda por auto del 17 de febrero de 2020.

El demandado una vez notificado, presentó recurso de reposición frente al auto admisorio de la demanda, argumentando que la demandante no había agotado el requisito de procedibilidad en este asunto. El preindicado disenso fue decidido por auto del 1º de febrero de 2022 y allí se dispuso la inadmisión de la demanda para que incorporara al proceso dicho requisito de procedibilidad; exigencia que fue cumplida mediante escrito del 22 de febrero de 2022, por lo que el Juzgado mediante auto del 9 de marzo de 2022 nuevamente admitió la demanda.

Con ocasión de lo anterior, el demandado, Sr. Alberto Antonio Echavarría Valencia, contestó la demanda y propuso las siguientes excepciones de mérito: «falta de causa para pedir», «carencia en la legitimación en la causa», «cobro de lo no debido», «las pretensiones de la demanda se encuentran descontextualizadas frente a sus hechos. Principio de congruencia»,

«temeridad y mala fe», «ausencia de los elementos que integran la responsabilidad civil extracontractual. Daño, culpa y nexo causal» y «prohibición de opción».

Agotada la etapa inicial de este proceso, el Juzgado fijó audiencia para el día 18 de octubre de 2022. En tal oportunidad el señor juez *a quo* diciendo realizar control de legalidad con base en el artículo 132 del CGP, consideró que la demanda tenía unas falencias graves que posiblemente impedirían en este asunto dictar una sentencia de fondo y, por ende, procedió a inadmitirla para que la parte demandante cumpliera con las siguientes exigencias:

«Se deberá aclarar el hecho 4 de la demanda, en el sentido de que se explique cuál es el objeto de la escritura 2582 del 23 de septiembre de 2010 elevada en la Notaría 3 del Círculo Notarial, no basta citar la escritura, debe explicarse cuál es el objeto o negocio que la misma consignó, de acuerdo con el artículo 82 del Código que estamos hablando, en el numeral 4, que señala que se debe decir en la demanda lo que se pretende con precisión y claridad y como auxilio de ese, el ordinal 5 dice que se deben expresar los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones. En el hecho que se pretende que se aclare, debe manifestar lo que consigna la escritura pública, para investigar si queda demostrado o no lo que se dice en el hecho Igualmente, en el hecho 6º la parte demandante debe explicar en qué consistieron esos desplazamientos y cuáles son los negocios o eventuales negocios que se presentaron entre esas dos personas que ayudaron a ese desplazamiento, o sea, una compraventa, una permuta o una donación, etc y en qué consistieron los negocios jurídicos o antijurídicos que celebraron esas dos personas o que realizó el demandado. En el hecho 7º el despacho solicita a la parte demandante, aclarar a cuál negocio se refiere, cual es el objeto del negocio, cuando se celebró, entre quienes se celebró. También, a qué título valor se refiere, cuál es su origen y también porqué se dejó sin efecto; también debe manifestar a cuáles deudas se refiere, describiendo quien debe las deudas, cuándo se originaron, cómo se originaron y en que consistieron; igualmente con las deudas que allí se mencionan. En el hecho 10º. Se solicita aclarar a cuáles procesos se refiere y de qué manera fueron avantes, describiendo entre quienes se originaron proceso donde se tramitaron y como se decidieron para que el juez tenga idea de las quejas de la señora demandante. En relación con las pretensiones que se formulan en la demanda, también se requiere que la parte demandante aclare cuales fueron los

negocios que se pretenden declarar irregulares o ilícitos por el demandado, para verificar si salen avantes y los efectos que se persiguen con esa declaración, si pretende se declaren nulos, simulados, etc.; debe ser muy específico en las pretensiones. En relación con el juramento estimatorio donde reclaman lucro cesante por frutos civiles, por la suma de \$700.000, hasta el pago total de la obligación, deberá explicar la procedencia de esos frutos civiles, indicando cuales bienes los produce, desde cuándo, quien los tiene, etc».

Dentro del término legalmente establecido, la demandante incorporó al expediente un escrito afirmando haber cumplido con las exigencias antes mencionadas de la siguiente manera:

Frente al hecho 4º de la demanda, señaló: *«El objeto o reales intenciones de este señor Alberto Antonio Echavarría Valencia, hoy demandado era apropiarse de todo el patrimonio de la demandante señora María Elena Gómez Palacio, y fue cuando en el año 2010 se firmó la escritura pública N° 2582 de fecha 23.09.2010, de la Notaria Tercera del Circulo Notarial de Medellín. El objeto de la escritura N°2582, como lo indica el texto de la misa es el acto jurídico de compra y venta del inmueble localizado en la carrera 76 N° 53 – 79 Conjunto Residencial Paraíso de Colores P.H., Apartamento 914 y parqueadero N° 57, estos inmuebles identificados con el folio de matrícula inmobiliaria N° 01N-5254237 y 01N-5253775, respectivamente, negociación está que según este título escritura pública fue por sesenta millones de pesos (\$60.000.000)»*. Adicionalmente, insistió en que el demandado nunca pagó el referido precio. Respecto del hecho 6º de la demanda, manifestó que los desplazamientos consistieron: *«Por la pérdida del apartamento y parqueadero la suma de \$252.136.000.00 Por la pérdida del terreno de Marinilla – Antioquia la suma de \$ 75.100.000.00 Por la pérdida de los ahorros en la cuenta de Bancolombia la suma de \$ 30.000.000.00 Por la pérdida de los muebles y enseres en la liquidación la suma de \$ 16.000.000.00 TOTAL PERJUICIOS \$373.236.000.00»*. En lo concerniente al hecho 7º de la demanda, indicó que, el negocio jurídico aludido en el denotado hecho consistió en una escritura pública de venta de un apartamento y un parqueadero de la Urbanización Paraíso de Colores celebrada el 23 de septiembre 2010 entre las partes en litigio. Asimismo, señaló: *«Título valor al que se refiere, es la letra de cambio que se firmó con la asesoría del hermano Francisco Javier Echavarría, letra esta que el Juzgado 20 civil del Circuito dejo sin valor ya que el señor Echavarría, obliga a la demandante a firmar como sujeto obligado del pago, razón está que fuera tomada por la judicatura para quitarle fuerza al referido título valor»*. Y en cuanto a las deudas, especificó: *«Cuales deudas las deudas que el demandado hizo que la demandara pagara por este. Como se originaron el demandado adeuda a varios acreedores y como sabía que la*

demandante tenía esos dineros se los quiso sacar en total serían \$373.236.000.00. Cuales préstamos, ya fueron avaluados en el valor anterior». En lo relativo al hecho 10º de la demanda, señaló una serie de radicados indicando la naturaleza de los procesos, los juzgados que los conocieron y los motivos de la existencia de aquellos. Respecto de las pretensiones, las redactó del siguiente tenor: «PRIMERO: Declarar que entre las partes se presentó unos desplazamientos patrimoniales que causaron perjuicios a la demandante María Elena Gómez Palacio, y que favorecieron de manera ilegal al demandado Alberto Antonio Echavarría Valencia (...) SEGUNDO: Que como consecuencia de la anterior declaración se declare que los negocios jurídicos de compraventa y prestamos realizado entre las partes en especial del apartamento y parqueadero genero a favor del demandado Alberto Antonio Echavarría Valencia, un desplazamiento patrimonial que perjuicio a la demandante señora María Elena Gómez Palacio, en la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L (\$440.000.000) por concepto de la pérdida del patrimonio. TERCERO: Que se ordene el pago de los perjuicios por pago de arrendamientos de la señora María Elena Gómez Palacio, a razón de setecientos mil pesos M/L (\$700.000) mensuales desde el mes de marzo de 2012, hasta que se realicé por parte del demandado el pago de las obligaciones en este proceso demandadas. CUARTO: Que se condene así mismo al señor Alberto Antonio Echavarría Valencia, demandado a pagar los perjuicios que se deriven de la posesión de mala fe, de todos los activos de la demandante, ya que este señor Alberto Antonio Echavarría Valencia, se adueñó no en forma debida del patrimonio de la demandante. QUINTO: Que se ordene el pago de los perjuicios morales hasta un tope de un mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en razón del sufrimiento físico y psicológico que le toco padecer a la demandante señora María Elena Gómez Palacio...». Y finalmente, realizó el juramento estimatorio de los siguientes conceptos: «DAÑO EMERGENTE Por la pérdida del apartamento y parqueadero la suma de \$252.136.000.00 Por la pérdida del terreno de Marinilla – Antioquia la suma de \$ 75.100.000.00 Por la pérdida de los ahorros en la cuenta de Bancolombia la suma de \$ 30.000.000.00 Por la pérdida de los muebles y enseres en la liquidación la suma de \$ 16.000.000.00 TOTAL DAÑO EMERGENTE \$373.236.000.00 LUCRO CESANTE Por los FRUTOS CIVILES, la parte demandante considera que son los arriendos dejados de percibir por la pérdida de los inmuebles desde el día 5 de Marzo de 2012, que serían de setecientos mil pesos M/L (\$700.000) hasta el pago total de la obligación. TOTAL, LUCRO CESANTE \$ 65.800.000.00 Cuál es el inmueble que los produce y quien los tiene esto es el inmueble objeto del desplazamiento apartamento 914 Torre 4 y el parqueadero 57 Urbanización Paraíso de Colores. TOTAL, DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE \$439.036.000.00».

Por auto del 17 de noviembre de 2022, el juzgado rechazó la demanda luego de considerar: «Revisado el escrito aportado por la parte actora, este juzgado

debe de manifestar que lo exigido no ha sido cumplido a cabalidad, toda vez que en general, lo subsanado, continúa igual de confuso, incluso las pretensiones fueron redactadas en la misma forma en que se presentaron en la demanda inicial, por lo que en esas condiciones, resulta imperativo dar cumplimiento a lo ordena el inciso cuarto del artículo 90 de Código General del Proceso».

LA IMPUGNACIÓN.

Oportunamente el actor interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, apelación, argumentando haber cumplido con cada uno de los requisitos exigidos por el juzgado *a quo*. Así mismo, precisó: *«Para la audiencia inicial del artículo 372 del Código General del Proceso, se da una NUEVA inadmisión de demanda constituyendo en una clara violación al debido proceso y al derecho de acceder a la justicia... El presente auto atacado es decir el de fecha 17 de noviembre de 2022, NO TIENE NINGUNA MOTIVACION, es mas de manera sorprendente en los tres (3) primeros renglones dicen "la parte actora apporto la subsanación de los requisitos exigidos..." y a renglón seguido dice que según el despacho "NO HA SIDO CUMPLIDO A CABALIDAD" (sic) (mayúsculas fuera de texto) argumentando que lo subsanado quedo igual de confuso».*

El juzgado, al resolver el recurso horizontal, se mantuvo en su decisión por auto del 21 de marzo de 2023. Explicó que, con ocasión a las imprecisiones y confusiones del escrito de la demanda, se vio en la obligación de inadmitirla nuevamente dentro de la audiencia inicial haciendo uso del control de legalidad previsto en el artículo 132 del CGP, por lo que, en dicha oportunidad, exigió una serie de requisitos que, si bien la recurrente intentó cumplir, no fue

suficiente para admitir, en una tercera oportunidad, su demanda. Lo anterior, porque

«En el escrito que pretendió cumplir las exigencias antes descritas y que se encuentran grabadas en el video de la audiencia inicial que reposa en el expediente digital, en archivo 25 del cuaderno principal, la parte demandada no realizó una descripción pormenorizada del contenido de la escritura pública No. 2582 del 23 de septiembre de 2010, puesto que solo dijo que se realizó una compraventa y que el demandado no le entregó el dinero. Revisada la escritura pública en cuanto a su contenido, fuera de una compraventa, entre las partes demandante y demandada, también tiene un mutuo a favor del Fondo Nacional del Ahorro, el cual tenía como finalidad cancelar el valor de la compra, lo cual no se menciona, así como tampoco se informa sobre la forma del pago de dicho negocio jurídico en cuanto a lo que restaba para completar el pago. Tampoco encontró claro el despacho el hecho sexto, puesto que el mismo también se refiere a negocios en forma general y compraventas de propiedades, sin especificar cada uno de ellos y los documentos, fechas y valores por los cuales se realizaron los desplazamientos patrimoniales. Menos aún indicó cuales fueron otras personas que aparte del señor Francisco Javier Echavarría valencia intervinieron, quedando igualmente redactado en forma general, debiéndose especificar cada negocio respecto del inmueble en marinilla y el de Medellín, indicando los pormenores de cada negocio jurídico y las condiciones de cada uno de los contratos. No explica de manera concreta el destino de los ahorros, quien compró un vehículo, cuánto costó el pago del arreglo, el parqueadero donde se guardaba el mismo y el seguro. Sobre el pago de las obligaciones, se refirió a las entidades financieras, sin expresar los valores y el día de su realización. Cita sobre que montaron un video para negar la existencia del título valor por \$100.000.000, pero no explica de manera pormenorizada como fue creado y en qué consistió, En cuanto a las deudas, expresó que las deudas que el demandado hizo que la demandada pagara por este, en este ítem, no se refiere a cada una de ellas, los montos y las fechas en que se realizaron; así tampoco explicó de manera precisa el origen de las deudas, solo informó un valor total. Ahora bien, al momento de aclarar las pretensiones en la forma pedida por el despacho, solicita declarar que se presentaron unos desplazamientos patrimoniales que causaron perjuicios a la demandada y que favorecieron a la demandada por la pérdida de apartamento, parqueadero, etc., sin incluir en ellas si lo pretendido es que se declare nulo, o que se declaren simulados los negocios jurídicos que ocasionaron la pérdida de los dineros de la demandante. A renglón seguido expresa que se ordene al pago de perjuicios por pago de arrendamiento y por posesión de mala fe, además de perjuicios morales e intereses de mora, sin incluir la pretensión que ordenó el despacho, respecto de la consecuencia de la declaración de nulidad o de simulación, como en estos casos es que cancelen los negocios jurídicos debiendo

pedir que se ordene oficiar a las notarías donde se protocolizaron para que se inscriba lo decidido por el despacho, en caso tal de que ellas salgan favorables».

Por ende, concedió la apelación interpuesta en subsidio, y para resolver la misma se,

CONSIDERA,

El auto que rechaza la demanda es susceptible del recurso de apelación conforme lo dispone el artículo 321-1 en concordancia con el art. 90 inciso 5º del CGP, norma que, a su vez, consagra: *«Los recursos contra el auto que rechace la demanda comprenderán el que negó su admisión»*.

Pues bien, el artículo 90 del C.G.P., dedicado a la admisión, inadmisión y rechazo de la demanda, dispone en su inciso tercero que el juez declarará inadmisibile la demanda solo en los siete (7) eventos que allí se enlistan, casos en los cuales *“el juez señalará **con precisión** los defectos de que adolezca la demanda, para que el demandante los subsane en el término de cinco (5) días, so pena de rechazo. **Vencido el término para subsanarla el juez decidirá si la admite o la rechaza.**”*

Surge sin hesitación del precepto en cita que las opciones que tiene el juez una vez vencido el término de cinco días concedido en el auto inadmisorio, para que el demandante subsane las falencias advertidas, son la admisión, obviamente si encuentra satisfechos los requisitos inicialmente echados de menos, o su rechazo, en caso contrario. No está entre sus posibilidades de actuación un nuevo auto inadmisorio, y por ello debe asumir con la atención debida el estudio inicial del libelo, pues si bien el demandado se verá expuesto al rechazo de su demanda si no cumple dentro de dicho término los requisitos

exigidos en el auto primigenio, tampoco quiere el legislador que permanezca expuesto a repetidos autos inadmisorios y menos, por supuesto luego de mediar auto ADMISORIO, ya porque el funcionario judicial encontró *prima facie* satisfechos los requisitos de ley, ora porque se satisficieron en oportunidad los inicialmente echados exigidos.

Y no de otra manera pudiera ser si se repara que el artículo 121 establece como término de duración del proceso en primera o única instancia, un (1) año contado a partir de la notificación del auto admisorio al demandado, e incluso, desde el día siguiente a la fecha de presentación de la demanda en los eventos en que dentro de los 30 días siguientes a ello no se haya notificado al demandante o ejecutante el respectivo auto admisorio o mandamiento de pago, según lo establece el artículo 90 inciso sexto del citado estatuto.

Por demás no puede soslayarse que el proceso comprende una serie de actos y etapas que se desenvuelven con dinamismo, que avanzan hacia un fin, cual es la resolución del conflicto de que se trate, función jurisdiccional por excelencia. De ahí que no pueda estar retrotrayéndose al momento inicial, el de la presentación de la demanda.

Lo anterior se explica, además, por la necesidad de garantizar el derecho fundamental de acceso a la justicia, en los términos previstos por los artículos 2º, 7º, 13 y 14 del C.P.G, en su orden del siguiente tenor:

*«Toda persona o grupo de personas **tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos** y la defensa de sus intereses, con sujeción a un debido proceso de duración razonable.*

Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento injustificado será sancionado» (resalto del Tribunal).

*«Los jueces, en sus providencias, **están sometidos al imperio de la ley.** Deberán tener en cuenta, además, la equidad, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina...**El proceso deberá adelantarse en la forma establecida en la ley»** (resalto del Tribunal).*

*«Las normas procesales **son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento,** y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley...» (resalto del Tribunal).*

***"El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones previstas en este Código..."** (resalto del Tribunal).*

Las anteriores e imperativas disposiciones fueron inobservadas en este caso, repárese que la demanda fue inicialmente inadmitida mediante auto del 20 de enero de 2020, y por encontrar el juez cumplidos en oportunidad los requisitos que había echado de menos, la admitió por auto del 17 de febrero del mismo año. Sin embargo, este proveído decayó por haber prosperado el recurso de reposición que contra el mismo interpuso el demandado, siendo así como en auto del 1º de febrero de 2022 nuevamente se inadmite la demanda; la parte actora nuevamente cumple lo entonces exigido puesto que por auto del 9 de marzo del mismo año, de nuevo se profiere auto admisorio, ante lo cual el demandado planteó excepciones de mérito.

Agotada así esa primera etapa del proceso, esto es, la conocida como *litis contestatio*, el señor juez programó la audiencia inicial de que trata el artículo 372 del C.G.P., señalando como fecha para su realización el día 18 de octubre de 2022, pero en esta, y aduciendo que la demanda tenía serias falencias que quizá obstarían una decisión de fondo, el funcionario diciendo ejercer control de legalidad profirió nuevo auto inadmisorio de la demanda -desconociendo que la misma está válidamente admitida desde el 9 de marzo de ese año-, para que se cumplieran una serie de exigencias, que infructuosamente trató de satisfacer la demandante puesto que por auto del 17 de noviembre siguiente, el señor juez rechazó la demanda por estimar insatisfechos los requisitos allí exigidos.

Bajo anterior contexto, es claro que el mecanismo de la inadmisión es procedente utilizarlo solo como primera providencia con ocasión del estudio de una demanda repartida al despacho (artículo 90 del CGP); más no puede ser utilizado con posterioridad a su admisión, salvo que por virtud de recurso horizontal el mismo sea revocado, y siendo así, aquél no puede utilizarse como una «*medida autorizada en este código para sanear los vicios de procedimiento o precaverlos*», y mucho menos, para «*corregir ... irregularidades del proceso*».

Así las cosas el “remedio” utilizado por el señor juez *a quo* resulta lesivo para la tutela jurisdiccional efectiva anhelada por el recurrente porque conllevó al rechazo de su demanda, lo que, a su vez, se traduce en una negación del derecho de acceso a la administración de justicia, volviendo inane cualquier esfuerzo en torno a la efectividad de dicho derecho sustancial de rango superior. Por consiguiente, el control de legalidad ejercido resultó inadecuado

y contraría la teleología con que aquel fue instituido, lo que resulta suficiente para la revocatoria del auto censurado.

Es que si el señor juez considera que el estudio inicial del libelo no fue completo, tal falencia no se la puede trasladar a la parte ejerciendo un equivocado control de legalidad, porque dicho actuar lo que demuestra es un nocivo interés por rechazar una demanda que, en el presente caso, estuvo precedida de dos autos inadmisorios y dos admisorios, según se destacó en precedencia. Por ende, el *a quo* debió utilizar, en la misma audiencia inicial que frustró, los remedios legalmente autorizados que resulten menos gravosos para la tutela judicial efectiva del actor, como son: 1. Realizar un exhaustivo interrogatorio de parte (artículo 372 numeral 7º inciso 2º del CGP), 2. Fijación del litigio (artículo 372 numeral 7º inciso 4º del CGP) y 3. Interpretar la demanda (artículo 42, numeral 5º del CGP).

Si tantas dudas tenía sobre lo relatado en los hechos 4º, 6º, 7º y 10º de la demanda, bien podía tratar de despejarlas a través del interrogatorio oficioso y exhaustivo que le ordena realizar a las partes el art. 372-7 del C.G.P., y de estimarlo necesario, el careo que la misma norma le autoriza.

Las herramientas anteriores concatenadas con la fijación del litigio prevista en el artículo 372 numeral 7º inciso 4º del CGP, constituyen una fructífera oportunidad para aclarar las dudas que asaltan al a-quo, porque luego de escucharse un interrogatorio de parte exhaustivo, y de estimarse necesario, un careo, se cuenta con los suficientes elementos para que las partes y sus apoderados puedan determinar *«los hechos en los que están de acuerdo y que fueren susceptibles de prueba de confesión»*, fijando de este modo, el

objeto del litigio con *«los hechos que considera demostrados y los que requieran ser probados»*. Agotado lo anterior, sobreviene en cabeza del señor juez *a quo*, por ser el conocedor del derecho (*iura novit curia*), *«interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto»* (art. 42-5 C.G.P.).

Los remedios antes reseñados resultan idóneos para ejercer adecuadamente el control legalidad previsto en el artículo 132 del CGP, en tanto que, salvaguardan el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el principio de legalidad y la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Y comoquiera que el utilizado por el señor juez *a quo* resultó lesivo a tales garantías, se procederá a revocar el auto del 18 de octubre de 2022 (inadmisión) y consecuentemente el fechado el día 17 de noviembre de ese mismo año (rechazo). Esto, porque *«Los recursos contra el auto que rechace la demanda comprenderán el que negó su admisión»* (artículo 90 inciso 5º del CGP).

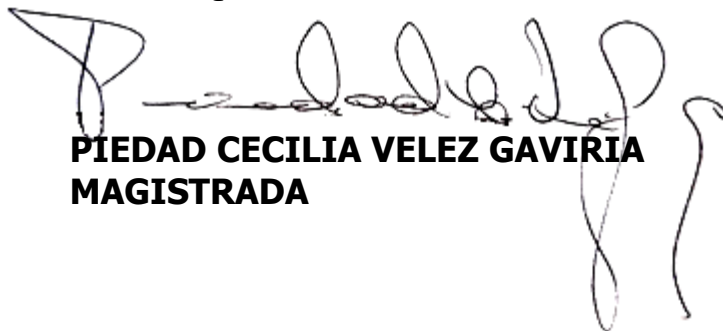
Por lo expuesto, la suscrita Magistrada,

RESUELVE,

PRIMERO: REVOCAR el auto del 18 de octubre de 2022 (inadmisión) y consecuentemente el fechado el día 17 de noviembre de ese mismo año (rechazo).

SEGUNDO: Devuélvanse las piezas digitales al despacho de origen. Sin condena en costas por no aparecer causadas.

NOTIFIQUESE



PIEDAD CECILIA VELEZ GAVIRIA
MAGISTRADA

Firmado Por:

Piedad Cecilia Velez Gaviria

Magistrada

Sala 002 Civil

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b970baf9bc24463e7038949e72e06bf628ac05fee28882be0e881c5ab289701**

Documento generado en 28/09/2023 04:14:26 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>